

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA DE DECISIÓN PENAL DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO

Magistrado Ponente: PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO

Radicado: 110012220000202000147 00 (T-395).
Accionante: Mayra del Socorro Santamaría Vélez.
Accionadas: Sociedad de Activos Especiales S.A.E., Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y la Fiscalía 35 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá
Asunto: Acción de Tutela de Primera Instancia.
Decisión: Avoca y concede medida provisional.
Fecha: Veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020).

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se ocupa la Magistratura de avocar el presente trámite de tutela y de disponer lo correspondiente, en atención a la medida provisional solicitada en la demanda de tutela promovida por la ciudadana MAYRA DEL SOCORRO SANTAMARÍA VÉLEZ, en nombre propio, contra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y el Juzgado Segundo Penal Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y la Fiscalía 35 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y vivienda digna.

2. HECHOS

2.1. La acción de tutela instaurada por la señora MAYRA DEL SOCORRO SANTAMARÍA VÉLEZ, en nombre propio, fue repartida a este Despacho por la Secretaría de la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con acta de 24 de septiembre de 2020.

2.2. Afirmó la demandante, que sobre su inmueble ubicado en la Carrera 11 No. 39-171 Apto 206 Conjunto Residencial la Serrezuela (Cartagena), identificado con el registro inmobiliario No. 060-70445, pesa la imposición de medidas cautelares por cuenta del proceso extintivo No. 4017 E.D.

2.3. Aduce que es propietaria del inmueble afectado obtenido lícitamente y reside allí en compañía de su familia. No obstante, la Sociedad de Activos Especiales, con radicado No. CS2020- 021501 de septiembre de la presente anualidad solicitó la entrega material del inmueble a sus ocupantes, advirtiendo que si dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación, no se había desocupado el inmueble, se procedía a realizar el desalojo del mismo con apoyo de la fuerza pública, si fuera necesario, diligencia que se inició el 17 de septiembre de 2020 a las 8:40 am, sin embargo, la misma fue suspendida atendiendo la recomendación del funcionario que representó a la secretaría de participación y desarrollo social de la Alcaldía Mayor de Cartagena al evidenciar el estado de salud del padre de la accionante, situación ante la cual se dispuso fijar como fecha máxima para continuar la diligencia el 5 de octubre de este año.

2.4. Por tanto solicita como medida provisional “...*SUSPENDER CUALQUIER DILIGENCIA de desalojo sobre el bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No 060-70445, hasta que se emita fallo de esta TUTELA...*”, además advierte que la Fiscalía profirió la resolución de calenda 13 de febrero de 2020, por medio de la cual declaró la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre el bien comprometido.

3. CONSIDERACIONES

La Sala considera pertinente destacar, en relación con las medidas cautelares que pueden ser ordenadas por el *Juez Constitucional* en el decurso de una acción de tutela para proteger un determinado derecho fundamental, que el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 establece:

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”.

Lo previsto en la norma citada persigue fundamentalmente dos propósitos: por un lado, la protección efectiva de los derechos fundamentales cuyo amparo se reclama y de otra parte, la necesidad de evitar que el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante resulte ilusorio.

Tales finalidades explican además, que el legislador haya facultado al Juez de Tutela, para que pueda decretar medidas cautelares de protección como: **i)** suspender la aplicación de un acto concreto que amenace o vulnere derechos fundamentales, **ii)** impartir órdenes procedentes y pertinentes para cumplir los objetivos antes señalados, y **iii)** dictar medidas de conservación o seguridad encaminadas a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados.

En este contexto, es oportuno recordar que, la Corte Constitucional, en varios de sus pronunciamientos, ha supeditado la procedencia de tales medidas de protección a aquellos casos en los que su adopción se requiere para: **a)** evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una violación, y **b)** impedir que la violación se agrave, si ya se produjo¹.

Pues bien, aplicando tales criterios al caso concreto, se concluye que en el presente caso emerge indispensable suspender la reprogramación del desalojo por

¹ Cfr. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Auto No. 110 del 5 de junio de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Asimismo, ver: Auto No. 041A de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); Auto No. 166 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda) y Auto No. 133 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).

parte de la Sociedad de Activos Especiales, en atención a que la demandante se encuentra vinculada al trámite extintivo y reside en el inmueble en cuestión con su familia en las especiales condiciones de vulnerabilidad que la misma esgrime.

Decisión que resulta pertinente atendiendo lo enunciado en la fallida diligencia de entrega real y material del bien llevada a cabo el 17 de septiembre de 2020, esto es “...*Para ello se agendara como fecha máxima para reprogramar la diligencia el 5 de octubre de 2020...*”.

En tal sentido, con el ánimo de hacer efectiva la titularidad de los derechos y evitar que un posible fallo favorable a los intereses de la accionante resulte ilusorio se ordenará la suspensión de la reprogramación de diligencia de desalojo hasta tanto se resuelva la presente acción de tutela.

Es así que se concede la solicitud elevada por la señora SANTAMARÍA VÉLEZ con las particulares observaciones referidas en precedencia.

Ahora, en cuanto a la solicitud especial de la accionante de vincular al trámite tutelar a la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar con el fin de que esté enterada de estas diligencias, esta Oficina despacha desfavorablemente su petición puesto que de los hechos narrados por la demandante no surge procedente tal aspiración, en tanto ningún acto vulneratorio de garantías se le atribuye a la citada entidad.

4. DECISIÓN

Con base en las consideraciones expuestas, esta Magistratura de la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, **DISPONE:**

1. **AVOCAR** el conocimiento de la demanda constitucional interpuesta por la ciudadana MAYRA DEL SOCORRO SANTAMARÍA VÉLEZ.
2. **CONCEDER** la medida provisional de SUSPENSIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA DILIGENCIA DE DESALOJO hasta tanto se resuelva la presente acción constitucional y **COMUNICAR** a la Sociedad de

Activos Especiales S.A.S. lo pertinente para que le dé cumplimiento a lo ordenado.

- 3. OFICIAR** a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., al Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá y a la Fiscalía 35 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá para que en el término de veinticuatro (24) horas ejerzan su derecho de contradicción allegando los soportes probatorios que consideren pertinentes.
- 4. VINCULAR** a las **partes o terceros con interés** en la acción de extinción del derecho de dominio que se adelanta por la Fiscalía 35 Especializada de la Unidad de Extinción del Derecho de Dominio de Bogotá, en el proceso No. 4017 (1100160990682201900164), para que si lo tienen a bien, ejerzan los derechos de contradicción y defensa, en el término perentorio de veinticuatro (24) horas, allegando los soportes probatorios que consideren necesarios. A efectos de lo anterior, se deberá surtir el trámite de notificación por aviso fijado en la Secretaría de la Sala y a través de la publicación del presente auto en la página web de la rama judicial, con el fin de enterar a las personas que puedan verse afectadas en el desarrollo de la demanda constitucional.
- 5. COMUNICAR** lo aquí dispuesto, por el medio más expedito, y a través de la Secretaría de la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, al accionante y a las autoridades demandadas.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO
Magistrado